



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

V LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

20 de junio de 1995

Núm. 93-10

INFORME DE LA PONENCIA

121/00078 Orgánica de contrabando.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de contrabando (expediente número 121/78).

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1995.—P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa**.

A la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda

La Ponencia encargada de redactar el informe en relación con el Proyecto de ley Orgánica de contrabando (expte. n.º 121/78), integrada por los Diputados D. Pere Jover i Presa (GS), D. José María Mohedano Fuertes (GS), D. José Luis Rodríguez Zapatero (GS), D.ª M.ª Luisa Cava de Llano y Carrió (GP), D.ª Teófila Martínez Sainz (GP), D. Mauro Valera Pérez (GP), D. Joan Simó i Burgues (GC-CiU), D. Narcis Vázquez Romero (GIU-IC), D. Joxe Joan González de Txábarri Miranda (GV-PNV), D. José Carlos Mauricio Rodríguez (GCC) y D. Xabier Albistur Marín (GMx) después de un estudio detenido del Proyecto de ley, sus enmiendas y demás documentos pertinentes, emiten el siguiente:

INFORME

A. Enmiendas que se propone que sean aceptadas por la Comisión.

1. Al artículo 2.

a. Se acuerda, con el criterio contrario de la representante del Grupo Popular, proponer a la Comisión que se incorpore al proyecto de ley la enmienda número 19, del Grupo Socialista, por entender que entraña una mejora técnica que completa la tipificación delictiva en materia de contrabando.

b. Con respecto al resto de las enmiendas a este artículo, los ponentes o no se pronuncian o lo hacen desfavorablemente.

2. Al artículo 3.

Los ponentes acuerdan proponer que se incorporen las enmiendas números 16 y 17, ambas de Coalición Canaria, con el fin de que sintonice la denominación de las penas que se emplean en este proyecto con la contenida en el proyecto de ley de Código Penal, actualmente en trámite parlamentario.

3. Al artículo 5.

Se acuerda no proponer la incorporación de la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario IU-IC, por entender su contenido principal -la referencia a los medios técnicos- ya englobado en la letra e del artículo 5.1 del proyecto.

4. Al artículo 6.

Una vez analizado el fin perseguido por la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario de IU-IC, se en-

carga al Letrado de las Cortes Generales que proponga a los ponentes un texto que mejore las deficiencias técnicas observadas en aquéllas y que, en su caso, se pondría a la Comisión por vía transaccional.

5. Al artículo 8.

Se acuerda no proponer la incorporación de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario IU-IC, pues prevalece la opinión de que el tratamiento específico propuesto para las labores del tabaco no es admisible desde un punto de vista jurídico.

Sin embargo, el ponente representante del Grupo Parlamentario Socialista estudiará la posibilidad de proponer alguna fórmula que recoja en algún aspecto el espíritu de esta enmienda.

6. Al artículo 9.

Se acuerda, con el criterio contrario de la representante del Grupo Popular, proponer la desestimación de la enmienda número 34, del Grupo Parlamentario Popular, presentada a la regla cuarta del artículo 9 del proyecto, en coherencia con la propuesta de rechazo de otras enmiendas con las que guarda relación.

7. Al artículo 10.

Lo señalado en el epígrafe anterior de este informe es extensible a la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Socialista, presentada al artículo 10 del proyecto de ley.

8. Al artículo 11.

Se acuerda, con el criterio contrario de la representante del Grupo Popular, proponer la incorporación de la enmienda 20, del Grupo Socialista, que recoge ya algunos aspectos de las enmiendas número 5, del Grupo Parlamentario Vasco y señor Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, número 10 del Grupo Parlamentario IU-IC, y número 26 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU).

El ponente representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Rodríguez Zapatero, anuncia que estudiará la posibilidad de presentar enmienda transaccional que pueda acoger algún punto más de las referidas enmiendas.

9. Al artículo 15 (nuevo).

Se acuerda, con el criterio contrario de la representante del Grupo Popular, proponer la incorporación de la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y del señor Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, aunque con una redacción distinta, que se estima más acertada desde un punto de vista jurídico.

La redacción es la siguiente:

«Artículo 15. Facultades de las autoridades, funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando.

Las autoridades, funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando podrán efectuar dentro del recinto aduanero el reconocimiento, registro de cualquier vehículo, caravana, paquete o bulto».

10. A la disposición adicional única.

Se acuerda proponer la incorporación de la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Socialista, con la siguiente redacción, que se estima más acertada desde un punto de vista estilístico y de claridad:

«4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá consignar en sus presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales relacionadas con la persecución del contrabando.

La fiscalización y control de estas partidas se llevará a cabo mediante el procedimiento que establezca la Intervención General de la Administración del Estado, que regulará en todo caso la confidencialidad antes indicada. Del resultado de la fiscalización y control referidos se dará traslado al Tribunal de Cuentas.

Los ponentes representantes de los Grupos Parlamentarios Socialista y Catalán (CiU) manifiestan su intención de retirar en el momento parlamentario oportuno sus enmiendas número 21 y 28 respectivamente. Por fin, la propuesta de incorporar la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), recogido en el epígrafe nueve del informe entraña también la incorporación del contenido de la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario de IU-IC, presentada por este Grupo a la disposición adicional única del proyecto de ley.

11. A la disposición final segunda.

Se acuerda proponer a la Comisión que se incorpore al proyecto de ley la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Socialista, en virtud de la justificación esgrimida en el mismo texto de la enmienda propuesta.

Como fruto de lo anterior se incorporarán también al proyecto de ley, aunque no en todos sus aspectos, las siguientes enmiendas: la número 2, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y del señor Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, la número 15, del Grupo Parlamentario IU-IC y la número 37, del Grupo Parlamentario Popular.

12. Con referencia al articulado del proyecto de ley en general.

Se acuerda proponer que la referencia a «reos del delito» utilizada a lo largo del proyecto sea sustituida por otra relativa a los que cometen el delito o la fórmula verbal que corresponda adaptada al contenido del precepto.

B. Propuestas derivadas del informe emitido por el Letrado de las Cortes Generales.

Se acuerda proponer a la Comisión que quedan incorporadas las observaciones de técnica legislativa y de mejora estilística que propone el Letrado de las Cortes Generales en el apartado II de su informe.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 7 de junio de 1995.—**Xabier Albistur Marín, M^a Luisa Cava de Llano, Joxe Joan Andres González de Txavarri, Pedro Jover Presa, M.^a Teófila Martínez Saiz, Jose Carlos Mauricio Rodriguez, Jose M^a Mohedano Fuertes, José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Simo i Burgues, Mauro Varela Perez, Narcis Vazquez Romero.**

ANEXO

PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CONTRABANDO

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Necesidad de la norma.

En los últimos años la aduana española ha pasado por un período de cambio sin precedentes. La configuración de la Unión Europea como un mercado interior establecida en el Acta Unica Europea, ha traído consigo la libertad de circulación de mercancías sin que queden sometidos éstas a controles como consecuencia del cruce de las fronteras interiores. Esta nueva situación hace necesaria una modificación de la normativa referente a la circulación intracomunitaria de mercancías, que respondía a un modelo basado, precisamente, en la imposición y el control fronterizos, lo que aconseja, a su vez, a proceder a una adecuación de la legislación conducente a reprimir la introducción ilícita de mercancías en el territorio aduanero.

Con la consagración del mercado único, la aduana española ha dejado de actuar como frontera fiscal para el tráfico con otros Estados miembros de la Unión Europea. El desafío fundamental del mercado único en este campo consiste en compatibilizar las facilidades dadas al libre movimiento de mercancías con la necesidad de mantener la efectividad del esfuerzo en la represión del contrabando.

Al mismo tiempo parece oportuno proceder una revisión de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, que modifica la legislación vigente en materia de contrabando y regula los delitos e infracciones administrativas en la materia, tras trece años de vigencia para, entre otras finalidades, actualizar el valor límite que en la misma se fijó de un millón de pesetas para la distinción entre delito e infracción administrativa de contrabando, incluir las operaciones ilícitas con algunas mercancías no recogidas anteriormente, como las especies de flora y fauna amenazadas de extinción y los precursores de drogas, y,

por fin, colmar algunas lagunas que la experiencia ha puesto de manifiesto.

2. Ambito de la reforma.

Como novedad respecto a la Ley precedente se incluyen en la nueva ciertas definiciones con el fin delimitar su ámbito de aplicación habida cuenta la puesta en marcha del mercado único comunitario.

Se incrementa la cuantía del valor de las mercancías para la tipificación del delito hasta 3.000.000 de pesetas, no sólo para actualizar la equivalencia real del valor de la peseta, sino también para aliviar la carga que pesa sobre el orden jurisdiccional penal.

El impacto social, económico y recaudatorio del comercio ilegítimo de labores del tabaco obliga a intensificar la reacción jurídica frente a este ilícito. A tal fin, se considerarán géneros estancados, a efectos de la nueva Ley, las labores del tabaco, aunque se trate de mercancías comunitarias.

Como se ha indicado ya, la entrada en vigor del mercado interior comunitario el 1 de enero de 1.993 supuso la supresión de los controles fronterizos entre los Estados miembros, lo que ha dado lugar a un abuso de las facilidades ofrecidas al comercio regular al amparo de los regímenes de tránsito y ocasionado desviaciones ilícitas de mercancías. Ello ha aconsejado que se penalicen los ilícitos que suponen el incumplimiento de la normativa reguladora del tránsito aduanero, recogida en el Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, del Consejo, de fecha 12 de octubre, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario y en sus normas de aplicación, así como en el Convenio TIR.

La nueva Ley consagra la existencia de contrabando en los casos de salida del territorio nacional de bienes que integren el Patrimonio Histórico Español, incluso si su destino es otro Estado miembro de la Unión. Esta inclusión se hace posible en virtud de lo prevenido en la Directiva 93/7/CEE, relativa a la restitución de bienes culturales, que deja libertad a cada Estado miembro para ejercer las acciones civiles y penales oportunas. Por otra parte, la nueva Ley tipifica como contrabando las operaciones realizadas con especímenes de la fauna y flora silvestres al tratarse de un comercio prohibido en ciertos casos, y en aplicación del Convenio de Washington de 3 de marzo de 1.973 y del correspondiente Reglamento comunitario.

Entre los supuestos constitutivos de delito de contrabando se ha incluido la exportación de material de defensa o material de doble uso, en el sentido que desarrolla el artículo 1. Ambos conceptos estaban ya considerados como contrabando en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1992, de 30 de abril.

En cuanto a las penas, la nueva Ley mantiene la pena de seis meses a tres años para el delito de contrabando y eleva la cuantía de la multa para el mismo, dada la alarma social que entraña la comisión repetida de estos ilícitos.

Como productos económicos generados por el contrabando susceptibles de comiso se incluyen las ganancias obtenidas del delito, lo que se corresponde con el artículo 344. bis. e) del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre.

El título II de la Ley define y regula las infracciones administrativas de contrabando. Al propio tiempo como eleva la cuantía hasta la que se consideran las infracciones administrativas y a partir de la cual las conductas tipificadas constituyen delito de contrabando.

Como novedad respecto al texto de la Ley 7/1982, de 13 de julio, se incrementa el importe de las multas por infracciones administrativas de contrabando y se precisa el momento en que comienza el plazo de prescripción tanto para las propias infracciones como para las sanciones que de ellas se deriven.

La nueva Ley faculta a los órganos de la Administración aduanera para autorizar la salida de mercancías de los recintos aduaneros, como entrega vigilada, a fin de facilitar las investigaciones encaminadas al descubrimiento del contrabando, y autoriza a los organismos y servicios encargados de la persecución del contrabando para establecer contactos e intercambiar información con otros servicios homólogos.

Por último, dado su contenido, parte de la Ley tiene el carácter de ley ordinaria.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definiciones

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

1. «Importación»: La entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como la entrada de mercancías, cualquiera que sea su procedencia, en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas.

2. «Exportación»: La salida de mercancías del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, con destino al resto de dicho territorio aduanero.

3. «Áreas exentas»: Las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en los artículos 166 y 98, apartado 2, del Reglamento (CEE) N.º 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre de 1.992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario.

4. «Mercancías comunitarias»: Las mercancías definidas como tales en el apartado 7 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1.992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario.

5. «Mercancías no comunitarias»: Las mercancías definidas como tales en el apartado 8 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1.992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario.

6. «Géneros o efectos estancados»: Los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.

7. «Géneros prohibidos»: Todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción esté prohibida expresamente por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determine en la norma que establece la prohibición y por el tiempo que la misma señale.

8. «Material de defensa»: El armamento y todos los productos y tecnologías concebidos específicamente o modificados para uso militar como instrumento de fuerza, información o protección en conflictos armados, así como los destinados a la producción, ensayo o utilización de aquéllos y que se encuentren incluidos en el Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo, o disposiciones que lo sustituyan.

9. «Material de doble uso»: Los productos y tecnologías de habitual utilización civil que puedan ser aplicados a algunos de los usos enumerados en el apartado anterior y que se encuentren incluidos en el Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo, o disposiciones que lo sustituyan.

10. «Precusores»: Las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, enumeradas en el cuadro I y II de la Convención de Naciones Unidas hecha en Viena el 20 de diciembre de 1.988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o en otros futuros Convenios ratificados por España.

11. «Deuda aduanera»: La obligación definida como tal en el apartado 9 del artículo 4 del Reglamento (CEE) N.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1.992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario.

TITULO I

DELITO DE CONTRABANDO

Artículo 2. Tipificación del delito.

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a tres millones de pesetas, los que:

a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

La ocultación o sustracción dolosa de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.

c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 91 a 97 y 163 a 165 de Reglamento (CEE) N.º 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre, y sus disposiciones de aplicación y en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1.975.

d) Realicen operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos, sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes.

e) Saquen del territorio español, sin autorización de la Administración del Estado, bienes que integren el Patrimonio Histórico Español.

f) Realicen, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1.973, y en el Reglamento (CEE) N.º 3626/82, del Consejo, de 3 de diciembre de 1.982.

g) Obtengan, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el despacho aduanero de géneros estancados o prohibidos o mercancías de lícito comercio o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.

h) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias o géneros estancados o prohibidos, en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español.

i) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o en las circunstancias previstas por el artículo 23 de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 29 de abril de 1.958.

j) Exporten material de defensa o material de doble uso sin autorización o habiéndola obtenido mediante declaración falsa o incompleta en relación con la naturaleza o el destino último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito.

2. También comete delito de contrabando el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones constitutivas, aisladamente consideradas, de

infracción administrativa de contrabando, siempre que el valor acumulado de los bienes, mercancías, géneros o efectos en cuestión sea igual o superior a tres millones de pesetas.

3. No obstante lo dispuesto en el número uno de este artículo, serán también reos del delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en el mismo, cualquiera que sea su cuantía, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias catalogadas como precursores, armas, explosivos o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito.

b) Que el contrabando se realice a través de una organización.

Artículo 3. Penalidad.

1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

En los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 la pena de prisión de seis meses a tres años se impondrá en su mitad inferior y en los restantes en su mitad superior.

2. Los tribunales impondrán la pena correspondiente en su mitad superior cuando los delitos se cometan por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del delito.

Artículo 4. Responsabilidad civil.

La responsabilidad civil que proceda declarar a favor del Estado derivada de los delitos de contrabando se extenderá en su caso al importe de la deuda aduanera y tributaria defraudada.

Artículo 5. Comiso.

1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:

a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.

b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.

c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en éste o el Tri-

bunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.

d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.

2. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.

3. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado.

Artículo 6. Intervención de bienes no monopolizados.

1. El juez o tribunal acordará la intervención de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo anterior, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso.

2. La autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a éstos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación, en su caso, de la garantía que se establezca.

3. La autoridad judicial podrá acordar, asimismo, que, mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.

Artículo 7. Enajenación anticipada.

1. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados, si éste fuere su destino final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos:

a) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.

b) Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo.

2. La enajenación a la que se refiere este artículo será ordenada por la autoridad judicial. A tal efecto se procederá a la valoración de las mercancías, géneros o efectos, cuando ésta no estuviere practicada, en la forma prevista en esta Ley.

3. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal.

Artículo 8. Mercancías de monopolio.

1. Cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, la autoridad judicial a cuya disposición se hayan colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos monopolios.

2. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme.

Artículo 9. Valoración de los bienes.

La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:

1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración, previa tasación pericial.

2. Si se trata de mercancías no comunitarias, por aplicación de las normas que regulan la valoración en aduana. El valor resultante se incrementará con el importe de los tributos exigibles a su importación.

3. Respecto a las mercancías comunitarias, se estará a los precios oficiales, si los hubiere, o, en su defecto, a los precios medios del mercado señalados en ambos casos para mayoristas.

4. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 2 de la presente Ley, así como para la de los de ilícito comercio, el juez recabará de los servicios competentes los asesoramientos e informes que estime necesarios.

TITULO II

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRABANDO.

Artículo 10. Tipificación de las infracciones.

Incurrirán en infracción administrativa de contrabando los que lleven a cabo las conductas enumeradas en el apartado 1 del artículo 2 de la presente Ley cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos ob-

jeto de las mismas sea inferior a tres millones de pesetas y no concurren las circunstancias previstas en el apartado 3 de dicho artículo.

Artículo 11. Sanciones.

1. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando serán sancionados con multa del tanto al triplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

2. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sanción mínima de la tenencia para la comercialización de labores de tabaco sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes será de 100.000 pesetas.

Artículo 12. Competencia, procedimiento y recursos.

1. Serán competentes para conocer de las infracciones de contrabando los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la forma en que se disponga reglamentariamente.

2. Las resoluciones de los órganos administrativos aludidos en el punto anterior que resuelvan o pongan fin al expediente administrativo de contrabando podrán ser objeto de impugnación ante la vía económico-administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 13. Medidas complementarias.

Se aplicará a las infracciones administrativas de contrabando lo dispuesto en el artículo 5, artículo 6 números 1 y 2 y en los artículos 7, 8 y 9 de la presente Ley.

Artículo 14. Prescripción.

1. Las infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cinco años a contar desde el día de su comisión.

2. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 15 (nuevo). Competencias en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas.

En los recintos aduaneros, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo, caravana, paquete o bulto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Unica. Organización funcional.

1. Las autoridades, los funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando continuarán desempeñando sus cometidos con la organización, dependencia administrativa y facultades y derechos que actualmente tienen reconocido.

2. Los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a requerimiento de los organismos y servicios encargados de la persecución del contrabando, podrán autorizar la salida de mercancías, sin interferencias obstativas, de los recintos o lugares habilitados por la Administración aduanera, a fin de facilitar las investigaciones encaminadas al descubrimiento del contrabando.

3. Con idéntico fin los organismos y servicios encargados de la persecución del contrabando podrán establecer contactos e intercambiar información con otros servicios homólogos nacionales o internacionales.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá consignar en sus presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales relacionadas con la persecución del contrabando.

La fiscalización y control de estas partidas se llevará a cabo mediante el procedimiento que establezca la Intervención General de la Administración del Estado, que regulará en todo caso la confidencialidad antes indicada. Del resultado de la fiscalización y control referidos se dará traslado al Tribunal de Cuentas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Unica. Retroactividad.

1. Los preceptos contenidos en la presente Ley tendrán efectos retroactivos, en cuanto favorezcan a los responsables de los actos constitutivos de contrabando a que la misma se refiere, en los términos establecidos por el artículo 24 del Código Penal.

2. Igual eficacia retroactiva tendrán las disposiciones sancionadoras previstas en esta Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 128. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Unica.

1. Quedan derogados la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, que modifica la legislación vigente en materia de contrabando y regula los delitos e infracciones administrativas en la materia; el artículo primero de la

Ley Orgánica 3/1992, de 30 de abril, que establece supuestos de contrabando en materia de exportación de material de defensa o de doble uso, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

2. En tanto que por el Gobierno no se aprueben las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente Ley, el Real Decreto 971/1983, de 16 de febrero, que desarrolla el título II de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, continuará en vigor su vigencia en todo aquello que no se oponga a la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Normativa supletoria.

1. En lo no previsto en el título I de la presente Ley se aplicará supletoriamente el Código Penal.

2. En lo no previsto en el título II de la presente Ley se aplicarán supletoriamente las disposiciones re-

guladoras del régimen tributario general y, en concreto, la Ley General Tributaria, así como subsidiariamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda. Carácter de la Ley.

El artículo 4 del título I, los preceptos contenidos en el título II, así como los apartados 2, 3 y 4 de la disposición adicional única, el apartado 2 de la disposición transitoria única y el apartado 2 de la disposición final primera de la presente Ley tienen el carácter de ley ordinaria.

Tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961